

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

Recurso nº 448/2025

MMCC 122/2025

NOTIFICACIÓN

Le notifico que, con fecha 16 de octubre de 2025 el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid ha dictado el siguiente Acuerdo:

Resolución de 16 de octubre de 2025, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, por la que se acuerda la adopción de medidas cautelares de suspensión del procedimiento de licitación del contrato denominado “Trabajos de auditoría de las cuentas anuales de los ejercicios 2025 y 2026 de los consorcios adscritos a la Comunidad de Madrid”, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo con número de expediente A/SER-002963/2025.

Con fecha 10 de octubre de 2025 ha tenido entrada en el registro de este Tribunal escrito de la representación legal de la representación de la UTE BRAINSTORMING AUDIT, S.L.P. – AUDIEST AUDITORES, S.A.P. interponiendo recurso especial en materia de contratación contra la Orden de la Dirección General de Patrimonio y Contratación por la que se acuerda la exclusión de la oferta de la UTE en el procedimiento arriba indicado.

La recurrente en el escrito de interposición del recurso, solicita que se acuerde la medida cautelar de suspensión del procedimiento de contratación hasta la resolución del presente recurso conforme al art. 49 LCSP para impedir que se causen otros perjuicios a los intereses afectados.

Con fecha 8 de octubre de 2025, este Tribunal ha solicitado al OC la remisión del expediente y del preceptivo informe establecido en el artículo 56.2 de la Ley de contratos del Sector Público. La documentación solicitada ha sido remitida con fecha 16 de octubre de 2025, así como el informe del OC en el que se opone a la solicitud de medida cautelar alegando que la suspensión pone en riesgo el comienzo de la

ejecución el 1 de enero de 2026, por lo que corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada.

El artículo 51.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP) establece que en el escrito de interposición se hará constar el acto recurrido, el motivo que fundamenta el recurso, los medios de prueba de que pretende valerse el recurrente y en su caso las medidas de naturaleza cautelar cuya adopción solicite.

Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la adopción de la medida cautelar exige que el recurso pueda perder su finalidad legítima, lo que significa que, de ejecutarse el acto, se crearían situaciones jurídicas irreversibles haciendo ineficaz la sentencia (en este caso resolución) que se dicte, e imposibilitando el cumplimiento de la misma en sus propios términos, con merma del principio de identidad. Aun concurriendo el anterior presupuesto, puede denegarse la medida cautelar siempre que se aprecie perturbación grave de los intereses generales o de tercero, lo que obliga a efectuar siempre a un juicio comparativo de todos los intereses en juego, concediendo especial relevancia, a la hora de decidir, a la mayor perturbación que la medida cause al interés general o al de un tercero afectado por la eficacia del acto impugnado; y, en todo caso, el juicio de ponderación que al efecto ha de realizar el órgano jurisdiccional debe atender a las circunstancias particulares de cada situación, y exige motivación acorde con el proceso lógico efectuado para justificar la adopción o no de la medida cautelar solicitada.

Por otro lado, el recurso especial en materia de contratación tiene como finalidad obtener una resolución rápida y eficaz, de manera que una decisión ilegal no se pueda consolidar por la perfección del contrato.

Dado el momento procesal en el que se encuentra el expediente de licitación y que

sería posible llegar a la adjudicación con anterioridad a la resolución del recurso, este Tribunal considera conveniente adoptar la medida cautelar de suspensión del procedimiento de licitación.

Así con la suspensión de la tramitación del expediente de contratación en este supuesto se trata de evitar la posibilidad de causar perjuicios a los interesados afectados.

De acuerdo con lo anterior, ponderadas las circunstancias del caso y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.3 de la LCSP, este Tribunal por unanimidad,

ACUERDA

Suspender la tramitación del procedimiento de adjudicación denominado "*Trabajos de auditoría de las cuentas anuales de los ejercicios 2025 y 2026 de los consorcios adscritos a la Comunidad de Madrid*", de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, con número de expediente A/SER-002963/2025" hasta que se resuelva el recurso y se acuerde expresamente el levantamiento de la suspensión.

Contra el presente Acuerdo no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de los que procedan contra la resolución que se dicte en el procedimiento principal.

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL

Firmado digitalmente por: DIAZ BENITO PEDRO
Fecha: 2025.10.17 09:57